

Ciepp

CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO DE POLITICAS PUBLICAS



El poder debe respetar la protesta

Roberto Gargarella¹

Toda protesta y, sobre todo, quienes protestan, merecen respeto. Pero respetar la protesta no es lo mismo que no reprimirla, como se jacta el Gobierno sin razón alguna para ello. Respetar la protesta tampoco implica someterse a cada una de las exigencias de sus integrantes, como temen los privilegiados. Respetar la protesta no es fácil: exige tomar en serio a los que se quejan, nunca burlarse de ellos ("ayer ocurrió algo importante: el Congreso chino"). Implica ponerse en el lugar del otro, sin denigrar a los miles de ciudadanos que, como suele ocurrir, se suman a la protesta poniendo lo mejor de sí, convencidos de que están haciendo algo bueno por su patria. No debería hacer falta decirlo: nunca puede tratarse a quienes protestan como inferiores a uno, mucho

menos como infrahumanos ("avanzaban como zombis").

Respetar la protesta implica leerla a su mejor luz, preguntándose con una mano en el corazón qué dicen de importante los que se quejan. Esta actitud no es simple: los que le temen se apresuran a leerla en su peor versión imaginable ("son resabios de la ultraderecha que muere", "esto es como la recepción a Lonardi en 1955"). Los que se acercan de este modo denigratorio a la protesta demuestran sus años, revelan el conservadurismo que los amenaza por dentro.

Lo cierto es que siempre cualquier protesta podrá leerse como un ejercicio ruin, hecho por miserables. De los que se movilizaron en la Primavera de Praga podría haberse dicho: "son capitalistas", "quieren que volvamos a ser una sociedad desigual". Y de los jóvenes que se movilizaron en París del 68: "son burguesitos, niños bien", "no tienen un mensaje claro". Y de quienes participaron en la "primavera árabe": "los mueve el odio", "son fanáticos

¹ Profesor de Derecho Constitucional (UBA-Di Tella)

religiosos." Por supuesto, qué duda cabe, todas las protestas citadas son muy diferentes. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común: miles y miles de personas que salen a las calles, de buena fe, asumiendo costos personales, exponiendo su cuerpo contra regímenes cada vez más amedrentados frente a la movilización popular, indispuestos a escuchar las quejas de quienes los cuestionan. Un buen test para saber qué camino escoge andar un gobierno es ver qué hace para escuchar a sus críticos: ¿facilita y promueve la creación de asambleas públicas, de medios independientes del Estado, de sindicatos cercanos a sus bases?, ¿o no lo hace, porque prefiere escucharlos a través de cada vez mejor financiados servicios de inteligencia? Todos necesitamos preguntarnos qué es lo importante que tienen para decirnos quienes protestan: necesitamos aprender de ellos. El Gobierno, sobre todo, necesita hacerlo.

Tomar en cuenta la voz de los que se quejan no implica considerar que todas o la mayoría de las demandas que enuncian los que protestan sean válidas. Pueden no serlo, y es labor del dirigente, sobre todo, distinguir cuáles demandas merecen ser dejadas de lado y cuáles no, y de qué modo. Todo eso a la luz de sus propias convicciones y los límites constitucionales de su mandato. En eso consiste, precisamente, el ejercicio de la democracia republicana. Pero no hablo aquí de republicanismo en el sentido vacío en que lo presenta la máquina cultural del kirchnerismo bobo

(el republicanismo ha sido, históricamente, la filosofía política de la democracia rousseauniana, participativa, de ciudadanos motivados por la virtud cívica). Hablo de democracia republicana en un sentido contemporáneo, es decir, democracia como una concepción que considera que las decisiones ganan en legitimidad y validez en la medida en que son discutidas por más personas que las que van a resultar afectadas por ellas.

Los que pensamos la democracia de este modo entendemos que no hay voz más necesaria que la de los críticos (que pueden representar, conviene saberlo, a la mayoría o una minoría de los ciudadanos). Por eso mismo exigimos que en el Congreso haya un debate real (en donde las partes se animen a escuchar y modificar sus posiciones) y no ficción de debate ("discutan lo que quieran, pero no cambiaremos una coma"). Por eso demandamos una aplicación palmariamente ecuatoriana de la ley de medios (que asegure la diversidad de voces, antes que la presencia de los empresarios amigos). Por ello mismo es que siempre, históricamente, demandamos un respeto especial por la voz de los piqueteros, los marginados, los desplazados de la sociedad. Es que asumimos que si las decisiones públicas (y, muy en particular, las normas penales) son escritas, aplicadas e interpretadas por unos pocos o con la exclusión efectiva de muchos, luego tales normas van a quedar ladeadas en contra de los excluidos (el estado de nuestras cárceles -de

composición homogénea en el marco de una sociedad heterogénea- reafirma, simplemente, nuestros temores). Por eso, también, nos quejamos en su momento del modo en que Néstor Kirchner procesó las demandas promovidas por Blumberg: Kirchner se acercó a los que marcharon entonces sin hacer lugar para el genuino dolor de tantas familias destruidas y -tanto o más grave que eso- lo hizo tomando la peor versión posible de sus reclamos, para convertir en ley panfletos de mano dura, clasistas y, por lo tanto, inconstitucionales.

La concepción de la democracia que asume el Gobierno resulta, notablemente, la opuesta a la aquí defendida. De allí que, de la Presidenta hacia abajo, reclamen una y otra vez a los caceros, ambientalistas y piqueteros que se constituyan como partidos políticos y se animen a competir con ellos en elecciones. De allí que tantos kirchneristas (muchos, ex progresistas) insistan en equiparar la democracia con las elecciones. De allí que el Gobierno fuerce la genuflexión de sus propios legisladores, obligándolos a votar leyes infames que, apenas años atrás, ellos hubieran denunciado a voz en cuello (la ley antiterrorista, la reforma de las ART). De allí que diputados y senadores oficialistas no demuestren jamás generosidad -una mano tendida- en las cámaras legislativas. El kirchnerismo usa el territorio parlamentario para insultar a sus adversarios ("narco-socialistas"), no los escucha -no le

interesó nunca hacerlo-, simplemente impone. Sus legisladores asumen que no hay nada que aprender de los demás.

Por partir de esa visión tan conservadora de la democracia, el kirchnerismo manda rápido la Gendarmería contra quien protesta, se burla de los ambientalistas, procesa a los piqueteros, barre a los *qom* de la 9 de Julio, llama extorsionadores a los sindicalistas en paro y vagos a los maestros en queja; encierra a mujeres y niños en Campo de Mayo, denuncia en público a los que se animan apenas a contrariarlos, usa los servicios de inteligencia para apretar a jueces infieles, envía la AFIP a perseguir a los que dudan de su proyecto, aplica el Proyecto X contra izquierdistas molestos. Difícil encontrar una concepción más conservadora de la democracia, una aproximación más pobre al ideal del debate inclusivo y robusto, una visión más limitativa de la protesta.

Diario La Nación
13 de noviembre de 2012